

Sube al 42% el porcentaje de declarantes que entrega el 0,52% del IRPF a la Iglesia

Los obispos critican el sistema y sugieren incrementar la asignación hasta el 0,8%

MANUEL MEDIAVILLA MADRID

El 42,29% de los contribuyentes que efectuaron la declaración de la renta en 1993 decidieron colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia católica con el 0,52%

El dinero recaudado de los 5,2 millones de declarantes que prefirieron la opción eclesiástica fue, en todo caso, superior a su peso porcentual y supuso el 51,64% de la asignación tributaria global. La otra mitad correspondió a los 7,1 millones de contribuyentes que eligieron la casilla de otros fines de interés social o que, al dejar ambas en blanco, vieron destinado su 0,5% a este concepto.

En cifras absolutas, el monto para la Iglesia católica rozó los 13.000 millones de pesetas, que suponen ya el 72% de la aportación total del Estado; éste cubrió con cargo a los presupuestos la diferencia hasta los 18.000 millones previstos para ese año. Ayer, el obispo Antonio Algorta, responsable económico de la Conferencia Episcopal, interpretó los datos como un avance hacia la meta de la autofinanciación recogida en los acuerdos España-Santa Sede.

La nueva campaña episcopal, efectuada en paralelo con la declaración de la renta de este año, pretende concienciar a los contribuyentes sobre la necesidad de marcar la casilla destinada a la Iglesia. Su eje publicitario serán las cuñas en la cadena de radio COPE y más de 50.000 carteles con un mensaje clave, «Este es el momento de ayudar a la Iglesia», y un par de acotaciones: «Hacer el bien no cuesta nada. Basta poner una cruz (x) en tu declaración de la renta».

Argumentalmente, la campaña se articula en una serie de precisiones y de quejas. Monseñor Algorta recalcó ayer que «no es un impuesto más», sino una simple decisión del contribuyente de destinar a la Iglesia «un duro por cada mil pesetas de lo que paga a Hacienda». Y tampoco se trata, añadió, de un impuesto religioso: «Nada más ajeno a eso. Es una contribución del Estado para que la Iglesia subsista, y se pregunta a los ciudadanos dispuestos a hacerlo».

«Disyuntiva equivoca»

El obispo insistió en que «la Iglesia necesita ese sostenimiento básico», tanto para mantener abiertos sus más de 22.000 lugares de culto y sus más de 40.000 centros de reunión y encuentro, como para garantizar la subsistencia de 29.000 sacerdotes «siempre dispuestos a ayudar». La campaña eclesiástica recuerda su compromiso con «innumerables obras sociales y humanizadoras en favor de los más pobres y marginados de la sociedad, sin distinción de raza o religión».

Una idea que remite al principal lamento episcopal respecto a la asignación tributaria: su confusión, por establecer una «disyun-

de su cuota íntegra. El dato confirma el leve pero sostenido aumento desde el 35,11% de 1988, cuando el Gobierno decidió sustituir la tradicional aportación presupuestaria por una nueva asignación tributaria. Esta

tampoco convence a los obispos españoles, que la consideran «confusa» en su planteamiento e insuficiente, al tiempo que sugieren incrementar esta aportación voluntaria hasta el 0,8%.



La meta de la Iglesia católica es llegar a la autofinanciación.

Casi 1.000 millones en el País Vasco

M.C.P. BILBAO

La Iglesia católica obtuvo 972 millones de pesetas de los 347.000 contribuyentes vascos que en sus declaraciones de la renta de 1993 optaron por financiar con el 0,52% del IRPF a la institución eclesiástica. Esta cifra es ligeramente superior a los 926 millones de pesetas que por el mismo concepto fueron a parar a las arcas de la Iglesia en 1992.

Por territorios es Alava la provincia en la que se observa una mayor tendencia a contribuir a la financiación de la Iglesia: en 1993 los declarantes alaveses aportaron 155 millones de pesetas, 20

más que el año anterior, lo que supone que el 52% de los contribuyentes de la provincia manifestaron su conformidad a participar en su sostenimiento económico. En Vizcaya, donde el porcentaje de ciudadanos que eligió ayudar a la Iglesia desciende a un 39%, se pasó de 536 millo-

nes en 1992 a 565 en el último ejercicio de la renta. Por último Guipúzcoa, con un 43% de declarantes que participaron en la financiación de la Iglesia católica, registró una pequeña disminución, pasando de los 255 millones de 1992 a 252 el año pasado.

tiva equivoca» entre la Iglesia y unos fines sociales que ésta comparte explícitamente. Tras definirla como una «iniciativa unilateral del Gobierno», Algorta remachó ayer que «nos causa mucha incomodidad» y lamentó que pueda dar lugar a análisis igualmente equivocados. A su juicio, por ejemplo, «no sería legítimo deducir un menor interés» de los católicos por



FERNANDO G. BAPTISTA

el sostenimiento de su Iglesia del solo hecho de que su mayoría sociológica en España (más del 80% se declaran creyentes) no se traduzca en otra similar en la opción eclesiástica en el 0,5% del IRPF.

El portavoz económico del episcopado consideró «arbitrario» que ese dinero vaya a otros fines sociales si el contribuyente no marca cruz alguna, y aconsejó a

quienes deseen apoyar a la Iglesia que se aseguren de que quede señalada cuando es rellenada por un gestor o por otra persona. También recordó que la opción es válida aunque la declaración sea negativa y, en fin, pidió la ayuda de «todos los ciudadanos, aunque no sean católicos, que reconozcan y valoren la importante labor social de la Iglesia».

Expertos consideran que los intereses políticos agravan el problema de la sequía

EL CORREO VITORIA

Técnicos en el tratamiento de aguas y responsables de las principales empresas de distribución de agua para consumo de España afirmaron ayer en Vitoria que el problema de la sequía está agravado por intereses políticos y desavenencias entre las comunidades autónomas, en el transcurso de unas jornadas en las que participaron 400 expertos.

El responsable del Canal de Isabel II de Madrid, Miguel García Póveda, señaló que «las zonas del norte de la península carecen de problemas de sequía mientras la batalla política entre comunidades autónomas permite que las zonas menos húmedas del Estado sufran los efectos de la falta de agua».

El representante de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, Manuel Tornel Negrete, censuró el incumplimiento del Plan Hidrológico Nacional que dicta un proceso de trasvases y de infraestructuras como la construcción de presas. «Es una cuestión política, exclusivamente», valoró. Tornel añadió que el agua, «tal y como se recoge en la Ley de Agua española, no es de unos o de otros dependiendo de que un determinado río pase por una comarca», y reclamó «una mentalidad de reparto».

UGT denuncia la muerte en prisión de un preso con sida a quien nadie quiso acoger

EFE MADRID

Un interno afectado de sida murió el jueves en la cárcel madrileña de Navalcarnero, después de que ni su familia ni ninguna institución aceptase hacerse cargo de él, según denunció ayer UGT-prisiones. El preso falleció tras permanecer cuatro días en coma en una dramática situación que, según el sindicato, se ha repetido en al menos otras tres ocasiones en los últimos meses.

El recluso había sido tratado en el hospital de Móstoles y, una vez dado de alta, no pudo acogerse a los artículos de la legislación penitenciaria que prevén la excarcelación para los enfermos terminales ya que nadie quiso hacerse cargo de él, ni su familia ni ningún organismo público o privado.

UGT-prisiones ha denunciado en un comunicado «el abandono al que están sometidos los enfermos terminales de sida y los drogodependientes que están presos».

Para esta central sindical «es intolerable la negligencia de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, así como la falta de atención prestada por las instituciones públicas y privadas ante las necesidades del colectivo».